

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

11956 *RESOLUCION de 26 de marzo de 1990, de la Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso número 5/56.618, interpuesto por don José Juan Martín Moya.*

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, de la Audiencia Nacional, el recurso número 5/56.618, interpuesto por don José Juan Martín Moya, contra la Administración General del Estado, sobre sanción de suspensión de funciones por un mes como autor de una falta grave del apartado p) del artículo 7.º del Reglamento de Régimen Disciplinario, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 2 de marzo de 1990, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Juan Martín Moya contra la Resolución del Ministerio de Justicia de 24 de marzo de 1986, desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la de 13 de enero de 1986, debemos anular y anulamos ambas Resoluciones administrativas, como no ajustadas a derecho y en su lugar declarar que los hechos imputados al actor son constitutivos de una falta leve del artículo 8 del apartado e) del Reglamento de Régimen Disciplinario, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por la cual le condenamos a una sanción de apercibimiento, sin hacer declaración sobre las costas de este recurso.»

En su virtud, esta Subsecretaría, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 26 de marzo de 1990.—El Subsecretario, Fernando Pastor López.

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

11957 *ORDEN de 29 de marzo de 1990 por la que se ejecuta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo de referencia 736/989, interpuesto por don Raúl González Trelles.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia con fecha 22 de febrero de 1990, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 736/1989, en el que son partes, como demandante, don Raúl González Trelles, y como demandada, la Administración, representada y dirigida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra actos denegatorios presuntos por silencio administrativo del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria sobre retribuciones complementarias.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Asturias ha decidido: Estimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Raúl González Trelles, que actúa en su propio nombre y derecho, contra desestimación presunta, por silencio, de su petición dirigida al Ministerio de Economía y Hacienda (Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria), que anula por no ser ajustada a Derecho. En su lugar, se declara el derecho del recurrente a percibir unas

retribuciones complementarias de cuantía correspondiente al nivel 19 de Complemento de destino reconocido a los Arquitectos Técnicos de carrera asimilables al mismo y en un período comprendido entre el 21 de diciembre de 1982 y el 29 de diciembre de 1985. Igualmente, se declara el derecho del recurrente a percibir las diferencias que le correspondan por dichas retribuciones complementarias (dedicación exclusiva, complemento de destino e incentivo de productividad o, subsidiariamente, de Cuerpo) entre lo que hubiera percibido y lo debido de percibir por la cuantía del 80 por 100 correspondiente a los funcionarios de carrera del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, nivel 19, entre el período de tiempo antes citado. Más los intereses legales correspondientes a partir del 21 de diciembre de 1987, fecha de la reclamación en vía administrativa. Todo ello sin imposición de costas en el presente recurso.»

En su virtud, este Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo previsto en la vigente Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, ha dispuesto el cumplimiento y ejecución en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Madrid, 29 de marzo de 1990.—P. D. (Orden de 22 de julio de 1985), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

11958 *ORDEN de 30 de marzo de 1990 por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Comercial Agrocor, Sociedad Anónima Laboral».*

Vista la instancia formulada por el representante de «Comercial Agrocor, Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación fiscal A-14216527, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades anónimas laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 6.480 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas se conceden a la Sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la Sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de actos jurídicos documentados para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.º del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.—Igualmente gozará de libertad de amortización referida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya